

PROCESO PENAL Y TWITTER: MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ana Rodríguez Álvarez
Profesora de Derecho Procesal
Universidad de Santiago de Compostela

TITLE: *CRIMINAL PROCEDURE AND TWITTER: AN INSTRUCTION MANUAL.*

RESUMEN: El propósito del presente trabajo pasa por ofrecer al lector una suerte de manual sobre la presencia de Twitter en el proceso penal. Una guía que le permita conocer, entre otras cosas, en qué delitos los *tweets* están siendo determinantes o si retuitear un comentario puede llegar a acarrear una sentencia condenatoria. A fin de alcanzar nuestro objetivo, formularemos una serie de cuestiones a las que, a continuación, trataremos de dar respuesta.

ABSTRACT: *The purpose of this paper is to offer the reader a kind of manual about the presence of Twitter in criminal procedure. A guide that allows to know, among other things, in which crimes tweets are being decisive or if retweet a comment can lead to a conviction. In order to achieve our aim, we will formulate some questions which we will then try to answer.*

PALABRAS CLAVE: proceso penal, Twitter, prueba.

KEYWORDS: *criminal procedure, Twitter, evidence.*

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. TWITTER EN EL PROCESO PENAL. 2.1. *¿En qué tipo de delitos están cobrando importancia los tweets?* 2.2. *¿Pueden acceder las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a nuestros mensajes en la red social Twitter?* 2.3. *¿Es posible ser condenado por la publicación de un único tweet?* 2.4. *¿Se puede incurrir en responsabilidad por un retweet?* 2.5. *¿Se puede quebrantar una prohibición de comunicación mediante Twitter?* 2.6. *¿Sirve un pantallazo como prueba de cargo?* 2.7. *¿Se tiene en cuenta el número de seguidores a la hora de valorar las circunstancias del caso?* 2.8. *¿Es posible condenar a alguien a cerrar su cuenta de Twitter?* BIBLIOGRAFÍA. JURISPRUDENCIA CONSULTADA.

1. INTRODUCCIÓN

Creada en el año 2006, Twitter es una plataforma de comunicación e información eminentemente pública que cuenta en la actualidad con millones de usuarios. Esta red social, al igual que acontece con cualquier otra realidad de nuestro entorno, no ha podido permanecer ajena al ámbito del Derecho. Y de este modo, en los últimos años, Twitter ha acabado repercutiendo en el ámbito jurídico y, más concretamente, en el proceso judicial. ¿Por qué? Principalmente, porque ha sido testigo silencioso tanto de la comisión de ilícitos civiles y penales, como de revelaciones comprometedoras para más de un usuario.

El propósito de las siguientes páginas pasa por ofrecer al lector una suerte de manual sobre la presencia de Twitter en el proceso penal. Una guía que le permita conocer, entre otras cosas, en qué delitos los *tweets* están siendo determinantes o si retuitear un comentario puede llegar a acarrear una sentencia condenatoria. A fin de alcanzar

nuestro objetivo, formularemos una serie de cuestiones a las que, a continuación, trataremos de dar respuesta.

2. TWITTER EN EL PROCESO PENAL

2.1. *¿En qué tipo de delitos están cobrando importancia los tweets?*

Para responder a esta pregunta es preciso establecer con carácter previo dos bloques diferenciados: el primero de ellos se conforma por todos aquellos casos en los que el *tweet* es el medio a través del cual se comete la infracción, lo cual constituye el supuesto más habitual en la práctica. Por su parte, en el segundo se encontrarían aquéllos en los que las palabras reflejadas en el *tweet* no suponen una acción punible, pero sirven como fuente de prueba para esclarecer la comisión de un delito.

Dentro del primer bloque, destacan como casos más frecuentes los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas¹; así como los relativos a injurias, calumnias o vejaciones injustas². No obstante, también nos encontramos con infracciones contra el orden público³; incitación al odio⁴; amenazas⁵; quebrantamiento

¹ Vid. STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 600/2017, de 25 de julio; SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 15/2017, de 29 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 9/2017, de 29 de marzo; STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 206/2017, de 28 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 12/2017, de 21 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 7/2017, de 9 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2017, de 9 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 4/2017, de 28 de febrero; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 2/2017, de 26 de enero; STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 4/2017, de 18 de enero; SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 33/2016, de 17 de noviembre; SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 35/2016, de 15 de noviembre; SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 29/2016, de 21 de septiembre; SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 24/2016, de 19 de julio; STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 623/2016, de 13 de julio; AJCI núm. 1 de 7 de marzo de 2016; SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 4/2016, de 1 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 3/2016, de 23 de febrero; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 7/2016, de 4 de febrero; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2016, de 29 de enero; AAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 556/2015, de 9 de diciembre; SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 39/2015, de 14 de octubre; AJCI núm. 1 de 7 de octubre de 2015; AJCI núm. 1 de 2 de julio de 2015; STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 378/2017, de 25 de mayo.

² Vid. SJP Pamplona núm. 4 89/2017, de 7 de abril; AAP Navarra (Sección 2ª) 341/2016, de 15 de diciembre; SAP Madrid (Sección 30ª) 503/2016, de 4 de julio; SAP Salamanca (Sección 1ª) 44/2016, de 30 de mayo; SAP Murcia (Sección 3ª) 454/2015, de 6 de noviembre; AJCI núm. 5 de 9 de septiembre de 2015; SAP Madrid (Sección 26ª) 394/2015, de 27 de mayo; SAP Cáceres (Sección 2ª) 80/2015, de 26 de febrero; SAP Navarra (Sección 2ª) 38/2015, de 24 de febrero; SAP Navarra (Sección 1ª) 19/2015, de 20 de febrero; AAP Cantabria (Sección 3ª) 71/2015, de 11 de febrero; SAP Burgos (Sección 1ª) 12/2015, de 14 de enero; SAP Madrid (Sección 6ª) 891/2014, de 12 de diciembre; SAP Murcia (Sección 3ª) 439/2014, de 14 de octubre; SJP Madrid núm. 24 169/2014, de 6 de mayo; SAP Cáceres 172/2014, de 10 de marzo; AAP Barcelona 374/2012, de 26 de abril; SAP Madrid 398/2013, de 18 de diciembre; SAP Madrid 285/2013, de 15 de noviembre.

³ Vid. SAP Murcia (Sección 3ª) 148/2015, de 26 de marzo –si bien esta calificación penal, que provenía de la sentencia de instancia, no era correcta según la Audiencia–.

⁴ Vid. SJI Cerdanyola del Vallès núm. 8 25/017, de 15 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 2/2017, de 26 de enero.

⁵ Vid. SAP León (Sección 3ª) 233/2015, de 27 de abril; SAP Burgos (Sección 1ª) 12/2015, de 14 de enero; SAP Madrid (Sección 6ª) 159/2014, de 21 de marzo.

de medida cautelar⁶; quebrantamiento de condena⁷; o distribución de pornografía infantil⁸.

Con respecto a las infracciones dentro de este primer grupo, en las que los *tweets* constituyen el medio de comisión del ilícito, lo cierto es que no existen especialidades en lo que respecta a la acción típica. La única particularidad destacada por los tribunales viene dada, como es lógico, por el medio en que se difunden, el cual provoca –al menos potencialmente– una mayor publicidad y repercusión de la acción⁹. Esta propagación de los mensajes, como señala la SAP Cáceres 172/2014, de 10 de marzo, puede verse más ampliada todavía a través de los denominados *retweets*¹⁰.

Dentro del segundo grupo, nos encontramos *tweets* empleados como prueba en infracciones contra los sentimientos religiosos¹¹; colaboración e integración en banda terrorista¹²; agresiones sexuales; lesiones¹³; y deslucimiento de bienes¹⁴. Destacaremos a este respecto tres ejemplos.

En primer lugar, la SJI Alicante núm. 853/2017, de 6 de marzo, sentencia que resuelve el mediático caso “caranchoa”. En ella el Juzgado recurre a un *tweet* publicado por el *youtuber* –en el que reconocía literalmente que sus supuestas bromas le podrían ocasionar algún tipo de agresión–, para, a la postre, rebajar la condena del repartidor¹⁵.

En una extensísima sentencia (teniendo en cuenta el carácter leve de la infracción enjuiciada) el Juzgado estima que “El consentimiento [en la lesión] en este sentido es claro y contundente, expresamente emitido en sus propias manifestaciones vertidas en la red y a través de las redes sociales, tal y como resultan de los vídeos y audios aportados por la defensa así como del mensaje lanzado a través de Twitter.

⁶ Vid. SAP Cuenca (Sección 1ª) 159/2013, de 17 de diciembre.

⁷ Vid. SAP Murcia (Sección 3ª) 454/2015, de 6 de noviembre.

⁸ Vid. SAP Salamanca (Sección 1ª) 30/2015, de 27 de octubre.

⁹ Se genera, como apunta la SAP Madrid 398/2013, de 18 de diciembre, un “efecto expansivo”. En línea con lo señalado, sostiene ORTIZ PRADILLO, J. C., *Problemas procesales de la ciberdelincuencia*, Colex, Madrid, 2013, p. 22, que “Si atendemos al clásico delito de amenazas o de las injurias y calumnias, resulta evidente la mayor lesividad que el empleo de las tecnologías de la comunicación supone para el honor, la fama o la reputación de una persona”.

¹⁰ SAP Cáceres 172/2014, de 10 de marzo: “Decir, como sostiene el recurrente, que unos mensajes difundidos a través de Twitter por quien reconoce tener más de un millar de seguidores constituyen «conversaciones privadas» constituye una afirmación carente de un mínimo rigor, pues la finalidad de esa red social es precisamente la contraria: La difusión del mensaje entre los seguidores de quien lo escribe, difusión que, además, puede verse ampliada a un ámbito subjetivo aún mayor a través de los «retuiteos» como sugiere la sentencia de instancia”.

¹¹ Vid. AAP Navarra (Sección 1ª) 198/2017, de 28 de abril.

¹² Vid. SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 11/2017, de 17 de marzo. SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 38/2016, de 15 de noviembre.

¹³ Vid. SJI Alicante núm. 8 53/2017, de 6 de marzo.

¹⁴ Vid. SAP Toledo (Sección 1ª) 7/2012, de 31 de enero.

¹⁵ Literalmente: “Últimamente estoy al borde de que me metan un buen guantazo, me merezco unos cuantos ya... xd”.

La concurrencia de los presupuestos del consentimiento en las lesiones no puede ser entendido en el sentido de que el denunciante buscara de propósito ser agredido, sino simplemente que asume el riesgo y tiene perfecto conocimiento de que el resultado dañoso puede producirse, siendo perfectamente previsible para el agredido, y, a pesar de ello, presta su consentimiento para ello, para que se produzca ese resultado dañoso, la bofetada, y así lo manifiesta a través de las redes sociales. Alardear públicamente de la posibilidad de ganarse una bofetada, como signo o evidencia de la calidad de su trabajo, en orden a procurar su entretenimiento y el de sus seguidores (puesto que tal era la finalidad de ese trabajo, tal y como señaló en el acto del juicio) y posteriormente retirar ese consentimiento o asunción de las consecuencias de la actuación provocadora que lleva a cabo, no deja de ser, en este sentido, una utilización ventajista del derecho penal, *ex post facto*, y en función de que el resultado de su actuación haya sido conforme a sus intereses o no, y, por tanto, debe considerarse que, dentro de los límites en que el propio interesado lo manifiesta, (la bofetada son gajes del oficio), debe considerarse que el consentimiento existe a los efectos del art. 155 del Código Penal. [...] Ahora bien, en la medida en que el consentimiento prestado, si bien reúne las condiciones y requisitos del art. 155 del Código Penal, no es conocido por el denunciado, debe considerarse que el hecho de que golpear a al denunciante y le causara las lesiones a que se ha venido haciendo referencia, debe considerarse punible, si bien como tentativa inidónea, al no existir bien jurídico protegido, al haber sido excluido por el acto de disposición previo llevado a cabo por el consentimiento del lesionado”.

En segundo lugar, la SAP Murcia (Sección 3ª) 439/2014, de 14 de octubre, relativa a un delito de agresiones sexuales, dispone que los insultos proferidos por el acusado a la víctima a través de Twitter, unidos a otros elementos probatorios, “constituyen indicadores objetivos de un perfil machista. Por ello no es inusual la reacción de Asunción, pues como cualquier sometida a esa suerte de violencia, pudo generar involuntarios sentimientos de dependencia emocional, sometimiento, culpa, pena, lástima, etc., que fueron detectados precisamente por la psicóloga”¹⁶.

Por último, en la SAP Toledo (Sección 1ª) 7/2012, de 31 de enero, los *tweets* del acusado sirvieron como prueba –junto con otros indicios– para condenarlo por una, a la sazón, falta continuada de deslucimiento de bienes (hoy convertida en infracción administrativa).

En el caso de autos, a pesar de que no existía prueba directa que identificase al apelante como autor de las pintadas, la Audiencia, confirmando la sentencia de instancia, consideró suficientes los indicios derivados de la investigación de los agentes de la Policía Local –ratificados en el acto del juicio–, unidos a los mensajes escritos en Twitter por el acusado. En tales mensajes “reconocía que había hecho una pintada en uno de los centros escolares en que efectivamente aparecieron las objeto del

¹⁶ Tales mensajes constituían también unas vejaciones injustas, sobre las que se pronuncia igualmente la resolución.

procedimiento, que tenía fotos de la misma y que dudaba colgarlas en la red porque la policía estaba tras el asunto”.

2.2. *¿Pueden acceder las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a nuestros mensajes en la red social Twitter?*

En principio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden acceder a nuestras cuentas de Twitter, en la medida en que éstas, por defecto, son públicas. Y es que los mensajes que los usuarios comparten en sus perfiles –los conocidos como *tweets*– son públicos salvo que expresamente se modifique la configuración. Esto significa que su contenido puede ser visualizado, no sólo por sus seguidores –los denominados *followers*–, sino por la totalidad de usuarios de Twitter e, incluso, por cualquier persona que navegue por Internet.

No sólo es posible que accedan sino que, de hecho, lo hacen. Tal y como se desprende de las sentencias, determinadas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ocupan de rastrear la Red, haciendo un patrullaje análogo al que realizan en la vía pública¹⁷.

En orden a despejar cualquier posible duda sobre la legitimidad de esta actuación, la jurisprudencia la ha ratificado en sus resoluciones. Sirva de ejemplo la SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 11/2017, de 17 de marzo: “La investigación de la Guardia Civil se inició mediante un rastreo en internet [...] esta labor en las redes sociales públicas entra dentro de las funciones que corresponden legalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro de sus funciones establece: prevenir la comisión de actos delictivos; e investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables. Las fuerzas y cuerpos de seguridad patrullan por la Red del mismo modo que sus agentes patrullan por las calles. No se puede confundir esta investigación legítima por los lugares públicos de las redes sociales, con una investigación prospectiva¹⁸ prohibida cuando afecte a los derechos fundamentales, ya sea al secreto de las comunicaciones, a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio, reconocidos en la Constitución”.

Tal y como adelanta esta sentencia, cuestión distinta sería que nuestras cuentas no fuesen públicas. Y es que la configuración pública predeterminada puede ser modificada por el usuario. Los mensajes pasarían entonces a ser *tweets* protegidos, los cuales ya no

¹⁷ Vid. SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 24/2016, de 19 de julio, que reconoce, además, el uso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la aplicación “*all my tweets*”, la cual “permite la descarga de los mensajes de texto, para ser visualizados concisamente”. También aluden a esa labor de rastreo, entre otras, la SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 12/2017, de 21 de marzo, la cual explica que tal labor se efectúa “mediante programas que buscaban ciertas palabras”.

¹⁸ Con mayor rotundidad niega el carácter prospectivo de estas pesquisas –tal y como había sido calificado en el caso de autos por la defensa del acusado– la SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 4/2016, de 1 de marzo.

serían visibles para todos los internautas, sino tan sólo para los seguidores que el usuario previamente hubiese aceptado. Lo mismo podemos decir en relación a los llamados mensajes directos, que no son otra cosa que mensajes privados enviados entre dos cuentas, los cuales sólo pueden ser vistos por remitente y destinatario, como si de una suerte de un correo electrónico se tratase¹⁹.

En ambos casos –*tweets* protegidos y mensajes directos–, sería necesaria una previa autorización judicial para poder acceder a su contenido²⁰. En este supuesto, el régimen jurídico aplicable sería el de intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, previsto en los artículos 588 ter a) y siguientes LECrim²¹.

Con todo, en ninguno de los casos analizados nos hemos encontrado con tal intervención. Antes bien, todas las cuentas Twitter eran de libre acceso.

2.3. ¿Es posible ser condenado por la publicación de un único tweet?

Sí, siempre que el mensaje cumpla con los requisitos exigidos en el Código Penal para la infracción de que se trate. Ahora bien, lo cierto es que la práctica totalidad de las sentencias analizadas aluden en su relato de hechos probados a una pluralidad de *tweets* –sea ésta mayor o menor–.

En todo caso, ya se trate de uno o varios *tweets*, de cara a su valoración no hay que atender únicamente al tenor literal de las palabras –máxime teniendo en cuenta la limitación de caracteres de los mensajes de esta red social²²–, sino también al “sentido o

¹⁹ Toda la información acerca del funcionamiento de la plataforma puede consultarse en su web: <https://support.twitter.com/>

²⁰ Ningún problema en este sentido se plantearía si los mensajes privados fuesen aportados por uno de los interlocutores. Aunque referido a los correos electrónicos, VELASCO NÚÑEZ, E., *Delitos cometidos a través de Internet. Cuestiones procesales*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2010, p. 118, afirma que “Respecto a la posibilidad de que uno de los comunicantes pueda presentar como prueba al juzgado el correo que le afecta, sin consentimiento del otro comunicante o aun con su oposición, se debe estar a favor de posicionarse rotundamente a su favor. [...] sus protagonistas, ya sea como emisores, ya como receptores, pueden en cualquier momento desvelar el contenido de la comunicación, y su aportación al proceso (v. gr., como cuerpo del delito, hecha por el denunciante) es perfectamente válida”.

Más detalladamente, *vid.* RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “Proceso penal y redes sociales: aportación por las partes de la información contenida en ellas”, en FUENTES SORIANO, O. (Coord.), *El proceso penal. Cuestiones fundamentales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 339-349.

²¹ Un estudio sobre esta diligencia de investigación puede encontrarse en RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “Intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas y *smartphones*. Un primer estudio a propósito de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, en ASENCIO MELLADO, J. M. (Dir.), *Justicia penal y nuevas formas de delincuencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 149-182. Más escuetamente, *cfr.* RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “La intervención de las comunicaciones y telemáticas: algunas dudas y reflexiones en torno a su vigente regulación”, en BUENO DE MATA, F. (Dir.), *Hacia una Justicia 2.0. Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática* (vol. I), Ratio Legis, Salamanca, 2016, pp. 339-353.

²² Limitación a la que alude, *e. g.*, AJCI núm. 1 de 7 de marzo de 2016: “teniendo en cuenta la limitación a 140 caracteres en Twitter, no es posible explicar claramente lo que se dice y cuál es la verdadera intención; abriéndose así la puerta a posibles de motivos de ofensa”.

La brevedad, sin embargo, no impide la articulación de un discurso. Así lo reconoce la SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 12/2017, de 21 de marzo: “La forma impone una economía estricta al lenguaje, de tal

la intención con que hayan sido utilizadas, pues es evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas y, a los efectos de establecer la responsabilidad por un delito de esta naturaleza, es preciso determinar con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada concreta ocasión” (AJCI núm. 1 de 2 de julio de 2015)²³.

Un ejemplo de que el contexto es determinante para la calificación de los hechos como típicos o atípicos lo encontramos en la SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 3/2016, de 23 de febrero. En él se analizaba un mensaje en el que se incluía la frase “Jotake Irabazi Arte” (“sin descanso hasta ganar”). Si bien es cierto que la sentencia reconocía que la jurisprudencia del Tribunal Supremo²⁴ consideraba que esta expresión “no implica, directamente, un mensaje inequívoco a la violencia ni una aprobación de su uso, [...] no tiene un sentido unívoco de apoyo o alabanza en clave terrorista, sino que es lo suficientemente ambigua como para que, en caso de duda, se esté al «favor libertatis»”, estima que en este caso el escenario y el contexto difieren. Mientras que en el caso que resolvió el Supremo la frase se pronunció en una manifestación a favor del acercamiento de los presos de ETA; en el de la Audiencia Nacional la expresión se escribió en un *tweet*, en el que, junto con la frase, figuraba la foto de un encapuchado que porta un cóctel molotov en llamas, razón por la cual el tribunal calificó su actuación como enaltecimiento del terrorismo. Como podemos comprobar, las mismas palabras en distintos contextos conducen a resoluciones divergentes.

Junto con ello, también el *hashtag* o etiqueta podría ayudar a desentrañar el verdadero sentido del mensaje publicado. En este sentido, el magistrado Grande-Marlaska Gómez –en su voto particular a la SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 12/2017, de 21 de marzo– sostiene que las etiquetas permiten interpretar el contenido del *tweet*, pues, a pesar de que “los *hashtag* no conforman directamente el tuit como pensamiento propio, en caso de duda sobre su intención [...] puede ayudar a su interpretación, al no dejar de ser voluntaria su vinculación”.

Con todo, la tarea de discernir, en determinados casos, “el alcance de lo intolerable”²⁵ no es en absoluto sencilla y ha llevado a nuestros tribunales a defender en ocasiones posturas maximalistas difícilmente –por no decir en absoluto– justificables. Un ejemplo de ello lo encontramos en la SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 9/2017, de 29 de marzo,

manera que la expresión se desarrolla mediante acrónimos, abreviaturas, contracciones, sobreentendidos, elisiones, símbolos (los llamados emoticones), onomatopeyas, deliberadas irregularidades sintácticas y gramaticales, signos ortográficos. Sin embargo, la brevedad impuesta no es un límite insuperable para la construcción del discurso”.

²³ También se refiere a la necesidad de valorar el contexto, el tono y las circunstancias del mensaje, entre otras, la SAP Salamanca (Sección 1ª) 44/2016, de 30 de mayo.

²⁴ La sentencia del Tribunal Supremo a la que se refería la Audiencia Nacional en su resolución era la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 121/2015, de 5 de marzo.

²⁵ Una dificultad reconocida por la propia jurisprudencia y que muestra a la perfección la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 4/2017, de 18 de enero (de donde hemos extraído la expresión del “alcance de lo intolerable”). En esta resolución, relativa a un caso de enaltecimiento del terrorismo, frente a la opinión mayoritaria del tribunal se alza el acertado voto particular de Perfecto Andrés Ibáñez.

sentencia que resolvió el polémico caso Cassandra. Además de condenar a la acusada por unos chistes de humor negro referidos a Carrero Blanco²⁶, el tribunal admite haber recurrido a *tweets* publicados por la joven cuando era menor para “contextualizar” y demostrar un pretendido carácter no conciliador: “Por lo demás, el marcado carácter no conciliador del acusado lo muestra en los textos por él escritos en época próxima a la mayoría de edad, como los siguientes [...]: Menciones las anteriores que efectuamos, no para incriminar indebidamente al acusado, sino para contextualizar sus opiniones y mensajes en el marco de este procedimiento y a través de prueba en él practicada y no impugnada”.

2.4. ¿Se puede incurrir en responsabilidad por un retweet?

Sí. Es más, en los relatos de hechos probados de la sentencia no es infrecuente que, junto con los mensajes de autoría propia, se incluyan también los mensajes retuiteados²⁷, que son aquellos escritos por otros usuarios pero que se comparten en el propio perfil.

En este sentido y al hilo de un caso sobre enaltecimiento del terrorismo, la Audiencia Nacional ha declarado que “resulta irrelevante que los mensajes, imágenes y composiciones fueran personalmente creados y publicados por el acusado o retwuiteados (sic) por el mismo, ya que el tipo no exige la autoría material de las imágenes sino la difusión pública de los contenidos, lo que reconoció haber efectuado el acusado; divulgándolos «en abierto», de forma que eran de libre acceso, sin restricciones” –SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 3/2016, de 23 de febrero–²⁸.

Más recientemente, el tribunal parece haber introducido un cierto matiz a esta afirmación, pese a que no se pronuncia en términos demasiado concretos. Y es que, si bien mantiene que el *retweet* puede ser considerado como “una actividad delictiva, en caso de que concurran los requisitos objetivos necesarios para colmar el tipo legal”; estima que en estos casos “las circunstancias del caso concreto se deben extremar, en tanto que la reflexión, desde el punto de vista del elemento subjetivo, puede quedar más desvanecida” –STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 600/2017, de 25 de julio–.

²⁶ Lo insólito de este caso llevó a más de doscientos profesores universitarios de Derecho Penal a firmar un crítico manifiesto titulado «Carrero como síntoma».

²⁷ A título ejemplificativo, SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2017, de 9 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 3/2016, de 23 de febrero; o SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 39/2015, de 14 de octubre.

²⁸ En la misma línea, la SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2016, de 29 de enero, afirmaba que la comisión del delito no requería “que el sujeto activo del mismo sea el inventor de las proclamas, mensajes, comentarios, etc. a través de los cuales se perpetran el ilícito penal. El hecho de publicitarlos en su cuenta Twitter como hizo la acusada, logrando así su difusión entre sus 790 seguidores, colman las exigencias típicas de naturaleza objetiva contenidas en el artículo 578 del Código Penal”.

2.5. ¿Se puede quebrantar una prohibición de comunicación mediante Twitter?

Sí, tanto si la prohibición de comunicación se ha impuesto como medida de protección en el transcurso del proceso; como si se ha incluido en el fallo condenatorio²⁹.

Así las cosas, la prohibición de comunicación se quebrantará si se envía un mensaje directo, pero también si se escribe un *tweet* que incluya una mención (@nombre de usuario) a la víctima, pues el mensaje aparecerá en el *timeline* de esta última.

Más allá de estos dos supuestos, cabría preguntarse si el mero hecho de escribir en una cuenta mensajes destinados a la víctima pero sin efectuar la consabida mención, permitiría también estimar quebrantada la prohibición de comunicación.

A pesar de que habría que efectuar una cautelosa valoración *ad casum*, en nuestra opinión, en determinadas ocasiones sí podría entenderse quebrantada la prohibición de comunicación aunque no se incluyesen las denominadas menciones a la persona protegida, ni se le enviasen mensajes directos a su cuenta de Twitter. Y ello atendiendo a un criterio teleológico, ya que se estaría utilizando una plataforma que, recordemos, en principio es pública y accesible a cualquier usuario de la Red, con el fin de que esos mensajes (o, más bien, la repercusión que los mismos generen) lleguen a la víctima. Esto es, existiría una voluntad de comunicarse, la cual se llevaría a cabo de un modo “indirecto”, para tratar de eludir la prohibición impuesta.

A idéntica solución podría llegarse cuando, sin efectuar ninguna mención ni enviar mensaje alguno, la persona sobre la que recae la medida se convierta en seguidora de la protegida. Y ello porque tal situación implica la realización de una acción, como es la de pulsar el botón “Seguir” en el perfil del usuario, que supone una puesta en contacto. Desde luego, una puesta en contacto diferente a la tradicional, pero no por ello pierde tal condición. A fin de cuentas, el concepto comunicación en su sentido tradicional ha cambiado con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información: sin duda, se ha vuelto más líquido y sus contornos se han desdibujado.

No obstante, la jurisprudencia ha entendido que no existía tal quebrantamiento en un supuesto en el que el acusado, aun escribiendo mensajes claramente dirigidos a la víctima, la había bloqueado previamente a la víctima en esta red social: “no cabe considerar la conducta desarrollada por el recurrente [...] como subsumible en el tipo penal de quebrantamiento de condena aplicado [...] pues tratándose de comentarios verificados en la red social citada a la que no tiene acceso la víctima, y ello por expreso bloqueo del titular de la cuenta, no cabe considerar que con tales comentarios se perseguía por el recurrente la finalidad de comunicarse con su ex novia, quien tomó conocimiento de tales comentarios, porque así se lo manifestaron dos amigos, respecto de los que nada consta que pudiera sustentar la posibilidad de que fueran utilizados por

²⁹ Vid. SAP Cuenca (Sección 1ª) 159/2013, de 17 de diciembre y SAP Murcia (Sección 3ª) 454/2015, de 6 de noviembre.

el recurrente, a modo de personas interpuestas, para vulnerar la prohibición de comunicación en forma indirecta” –SAP Asturias (Sección 3ª) 131/2016, de 29 de marzo–.

Con todo, desconocemos si la decisión de la Audiencia Provincial hubiese sido la misma si no se hubiera producido el previo bloqueo de la usuaria.

2.6. ¿Sirve un pantallazo como prueba de cargo?

En principio, no puede descartarse de plano la validez y la eventual consideración de un mero pantallazo como prueba de cargo. En estos casos, el pantallazo constituiría un elemento probatorio más, el cual, junto con los restantes que se desprendan de los medios de prueba practicados, puede coadyuvar a formar en uno u otro sentido la convicción judicial³⁰. Ello no impide afirmar, sin embargo, que el pantallazo, por sí solo, no será suficiente para enervar la presunción de inocencia³¹.

En todo caso, siempre resulta conveniente aportar un informe pericial que despeje cualquier duda sobre la autoría de los *tweets* y su eventual manipulación³².

Al margen de ello y sin perjuicio de las fuentes de prueba que puedan aportar las partes, de la jurisprudencia se desprende que es habitual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean quienes se ocupen de comprobar la autenticidad de los mensajes y la autoría de los mismos, testificando posteriormente en el plenario³³. Igualmente, encontramos supuestos en los que los agentes elaboran los correspondientes

³⁰ Vid. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “Proceso penal y redes sociales...”, *op. cit.*

³¹ En esta línea se pronuncia la jurisprudencia en resoluciones como la SAP Murcia (Sección 3ª) 454/2015, de 6 de noviembre: “La sentencia de instancia determina la autoría del acusado acudiendo al «pantallazo» [...] y consiguiente impresión documental que obtuvo la Policía [...]. A partir de ahí, tomando como cierto e indubitado que aquellas expresiones injuriosas que contenía el mensaje de texto referido procedían de la propia cuenta de Twitter del acusado se dicta su condena. [...]”

Pero esta forma de operar [...] presenta graves inconvenientes e inseguridades jurídicas debido a la facilidad que existe hoy en día en las redes sociales para que cualquiera pueda crear una cuenta de este tipo con nombre o identidad falsos o incluso utilizar, conociendo previamente las claves de seguridad correspondientes, los datos de otra persona.

[...] En el caso concreto no se practicó dicha prueba pericial que nuestro Tribunal Supremo considera ahora indispensable, o al menos la posibilidad de que éste se practicara y se hiciera con sus debidas garantías. Y tampoco consta que la denunciante facilitara sus propias claves personales de acceso a su cuenta de Twitter a fin de poder practicar dicha pericia y lograr unos resultados completamente seguros.

Por ello, al ser el *pantallazo* documentado en autos la única prueba de cargo utilizada en este caso para determinar la autoría de los mensajes, que ya hemos visto es totalmente insuficiente, procede estimar el recurso absolviendo al acusado al no existir la mínima seguridad jurídica de que fuera él, y no un tercero, quien colgara realmente aquellos mensajes injuriosos en la citada red social”.

³² De todos modos, no es infrecuente que los acusados reconozcan la autoría de los mensajes. Vid. STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 623/2016, de 13 de julio; SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 12/2017, de 21 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 35/2016, de 15 de noviembre; SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 29/2016, de 21 de septiembre; SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 4/2016, de 1 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 3/2016, de 23 de febrero; o SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2016, de 29 de enero.

³³ Cfr. SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 33/2016, de 17 de noviembre; SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 9/2017, de 29 de marzo; o SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 3/2016, de 23 de febrero.

informes periciales que tratan de determinar si los dispositivos aprehendidos al acusado constituyen la fuente de emisión de los mensajes³⁴.

Otra referencia a la práctica la hallamos en el AJCI núm. 5 de 9 de septiembre de 2015, que ordena salvaguardar, entre otros, los *tweets* mencionados en la denuncia. A tal fin, dispone que el letrado de la Administración de Justicia levantará acta, auxiliado por los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía en la ejecución de esta medida para evitar la pérdida o destrucción de la información.

2.7. ¿Se tiene en cuenta el número de seguidores a la hora de valorar las circunstancias del caso?

Aunque no es un dato determinante, sí se tiene en cuenta en algunas ocasiones. De este modo, el número de seguidores suele ser un dato mencionado en el relato de hechos probados pero, además, se ha empleado en orden a valorar la gravedad de los hechos. Un ejemplo de esto último lo encontramos en la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 4/2017, de 18 de enero, que condenó a César Strawberry, cantante y líder de Def con Dos, por enaltecimiento del terrorismo: “El hecho de que se trate de unos mensajes difundidos a partir de una cuenta de Twitter con más de 8.000 seguidores, cada uno de ellos potenciales redireccionantes de tales mensajes, descarta la calificación de los hechos como de menor gravedad”.

Al margen del mayor o menor número de seguidores, lo cierto es que, como ya apuntábamos *supra*, el propio medio comisivo del delito intensifica de forma exponencial el daño a las víctimas, no sólo por su mayor repercusión –un público potencial mayor que el mismo comentario proferido en la calle–, sino también por la falta de control sobre su difusión³⁵.

A esta circunstancia alude la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 4/2017, de 18 de enero: “Otro hecho complica, todavía más si cabe, nuestro análisis. Y es que la extensión actual de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones o mensajes que, en otro momento, podían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y seleccionado grupo de destinatarios. Quien hoy incita a la violencia en una red social sabe que su mensaje se incorpora a las redes telemáticas con vocación de perpetuidad. Además, carece de control sobre su zigzagueante difusión, pues desde que ese mensaje llega a manos de su destinatario éste puede multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión. Los modelos comunicativos clásicos implicaban una limitación en los efectos nocivos de todo delito que hoy, sin embargo, está ausente. Este dato, ligado al inevitable recorrido transnacional de esos mensajes, ha de ser tenido en cuenta en el momento de ponderar el

³⁴ E. g., SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 15/2017, de 29 de marzo.

³⁵ A la específica repercusión de las redes alude también la SAP Madrid (Sección 30ª) 503/2016, de 4 de julio.

impacto de los enunciados y mensajes que han de ser sometidos a valoración jurídico-penal”.

2.8. ¿Es posible condenar a alguien a cerrar su cuenta de Twitter?

Sí, determinadas resoluciones condenan al cierre de la cuenta Twitter³⁶, aunque otras se limitan a ordenar el borrado de los mensajes calificados como delictivos³⁷. Asimismo, en ocasiones se acuerda también el comiso y posterior destrucción de los ordenadores y/o teléfonos móviles del acusado de los que se sirvió para cometer tales infracciones³⁸.

Junto con ello, algunas resoluciones imponen la publicación de la condena. Así, la sentencia del 22 de mayo de 2013 del Juzgado de Instrucción núm. 35 de Madrid –de la que trae causa la SAP Madrid (Sección 7ª) 285/2013, de 15 de noviembre–, imponía, entre otros, la publicación del contenido del fallo de la sentencia durante tres meses en su cuenta de Twitter. Esta condena fue cuestionada por el recurrente, quien, además de indicar que no era merecedor de la misma, señalaba que desconocía “cómo habría de llevarse a cabo cuando solo se pueden publicar ciento cuarenta caracteres y [...] si conlleva que la publicación se mantenga tres meses o que sea el recurrente el que durante tres meses se dedique a publicar el fallo de una sentencia con los problemas que se pueden derivar de tal pretensión”.

La Audiencia, sin embargo, no aclara este extremo, pues se limita a señalar que “será con ocasión de la ejecución de la sentencia cuando pueda [el recurrente] promover una solicitud de aclaración o un incidente sobre esta cuestión, sin que este tribunal tenga que pronunciarse sobre dicha cuestión en esta alzada”³⁹.

Ante una circunstancia como ésta, una posible opción pasaría por hacer una sucinta mención a la condena en el *tweet* y, empleando un acortador de URL, incluir una dirección web que redirija al contenido íntegro de la resolución. Otra, que se procediese a la publicación del fallo mediante *tweets* sucesivos.

En este punto, lo cierto es que las condenas civiles suelen ser más explícitas, llegando a indicar el contenido del mensaje y el modo de publicación para el caso de que se rebasen los ciento cuarenta caracteres. Sirva de ejemplo, la SJPI Pamplona núm. 5 213/2012, de 15 de octubre, que no sólo ordena cómo se ha de proceder para publicar el fallo, sino que incluso facilita el contenido del mensaje: “El texto del mensaje será el siguiente: «Publico este tuit en cumplimiento de la sentencia de 11.10.12 del Juzgado de

³⁶ Condenan al cierre de cuentas, *inter alia*, SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2017, de 9 de marzo; SJI Cerdanyola del Vallès núm. 8 25/017, de 15 de marzo; y SJP Madrid núm. 24 169/2014, de 6 de mayo.

³⁷ Condena al borrado de mensajes, *e. g.*, SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 9/2017, de 29 de marzo.

³⁸ Condenan al comiso y destrucción de ordenadores y/o teléfonos móviles, entre otras, SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2017, de 9 de marzo; SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 29/2016, de 21 de septiembre; y SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 7/2016, de 4 de febrero.

³⁹ También la SJP Madrid núm. 24 169/2014, de 6 de mayo, obliga a la publicación de la sentencia, aunque no concreta el modo en que ha de hacerse.

1ª instancia 5 de Pamplona, que declara que los tuits que remití el 18.03.11 vulneran el honor de Doña Josefa». (Si el texto no cabe en un solo *tweet* se enviará en varios hasta completarlo, uno a continuación del otro)”.

BIBLIOGRAFÍA

HUNT, P. H., “Tortious tweets: a practical guide to applying traditional Defamation Law to *twibel* claims”, *Louisiana Law Review*, vol. 73, 2013, pp. 559-600.

ORTIZ PRADILLO, J. C., *Problemas procesales de la ciberdelincuencia*, Colex, Madrid, 2013.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “Intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas y *smartphones*. Un primer estudio a propósito de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, en ASENCIO MELLADO, J. M. (Dir.), *Justicia penal y nuevas formas de delincuencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 149-182.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “La intervención de las comunicaciones y telemáticas: algunas dudas y reflexiones en torno a su vigente regulación”, en BUENO DE MATA, F. (Dir.), *Hacia una Justicia 2.0. Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática* (vol. I), Ratio Legis, Salamanca, 2016, pp. 339-353.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “Proceso penal y redes sociales: aportación por las partes de la información contenida en ellas”, en FUENTES SORIANO, O. (Coord.), *El proceso penal. Cuestiones fundamentales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 339-349.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, A., “Me lo ha contado un pajarito. Los *tweets* como prueba en el proceso”, en BUENO DE MATA, F. (Dir.), *Processulus: estudios sobre Derecho Procesal*, Comares, Granada, 2015, pp. 191-201.

VELASCO NÚÑEZ, E., “Investigación procesal penal de redes, terminales, dispositivos informáticos, imágenes, GPS, balizas, etc.: la prueba tecnológica”, *Diario La Ley*, núm. 8183, 4 de noviembre de 2013, pp. 1-31.

VELASCO NÚÑEZ, E., *Delitos cometidos a través de Internet. Cuestiones procesales*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2010.

JURISPRUDENCIA CONSULTADA

Jurisprudencia penal

Tribunal Supremo

STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 600/2017, de 25 de julio.

STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 378/2017, de 25 de mayo.

STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 206/2017, de 28 de marzo.
STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 4/2017, de 18 de enero.
STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 623/2016, de 13 de julio.
STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 264/2015, de 7 de mayo.
STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 121/2015, de 5 de marzo.

Audiencia Nacional

SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 15/2017, de 29 de marzo.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 9/2017, de 29 de marzo.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 12/2017, de 21 de marzo.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 11/2017, de 17 de marzo.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 7/2017, de 9 de marzo.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2017, de 9 de marzo.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 4/2017, de 28 de febrero.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 2/2017, de 26 de enero.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 33/2016, de 17 de noviembre.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 38/2016, de 15 de noviembre.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 35/2016, de 15 de noviembre.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 29/2016, de 21 de septiembre.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 24/2016, de 19 de julio.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 4/2016, de 1 de marzo.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 2ª) 3/2016, de 23 de febrero.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 7/2016, de 4 de febrero.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 6/2016, de 29 de enero.
AAN (Sala de lo Penal, Sección 4ª) 556/2015, de 9 de diciembre.
SAN (Sala de lo Penal, Sección 3ª) 39/2015, de 14 de octubre.

Audiencias Provinciales

AAP Navarra (Sección 1ª) 198/2017, de 28 de abril.
AAP Navarra (Sección 2ª) 341/2016, de 15 de diciembre.
SAP Madrid (Sección 30ª) 503/2016, de 4 de julio.
SAP Salamanca (Sección 1ª) 44/2016, de 30 de mayo.
AAP Cantabria (Sección 3ª) 214/2016, de 20 de abril.
SAP Asturias (Sección 3ª) 131/2016, de 29 de marzo.
SAP Murcia (Sección 3ª) 454/2015, de 6 de noviembre.
SAP Salamanca (Sección 1ª) 30/2015, de 27 de octubre.
SAP Madrid (Sección 26ª) 394/2015, de 27 de mayo.
SAP León (Sección 3ª) 233/2015, de 27 de abril.
SAP Murcia (Sección 3ª) 148/2015, de 26 de marzo.
SAP Cáceres (Sección 2ª) 80/2015, de 26 de febrero.
SAP Navarra (Sección 2ª) 38/2015, de 24 de febrero.
SAP Navarra (Sección 1ª) 19/2015, de 20 de febrero.

AAP Cantabria (Sección 3ª) 71/2015, de 11 de febrero.
SAP Burgos (Sección 1ª) 12/2015, de 14 de enero.
SAP Madrid (Sección 6ª) 891/2014, de 12 de diciembre.
SAP Murcia (Sección 3ª) 439/2014, de 14 de octubre.
SAP Madrid (Sección 6ª) 159/2014, de 21 de marzo.
SAP Cáceres (Sección 2ª) 96/2014, de 10 de marzo.
SAP Madrid (Sección 2ª) 398/2013, de 18 de diciembre.
SAP Cuenca (Sección 1ª) 159/2013, de 17 de diciembre.
SAP Madrid (Sección 7ª) 285/2013, de 15 de noviembre.
SAP Madrid (Sección 7ª) 180/2013, de 31 de mayo.
SAP Madrid (Sección 17ª) 659/2012, de 10 de mayo.
AAP Barcelona (Sección 2ª) 374/2012, de 26 de abril.
SAP Toledo (Sección 1ª) 7/2012, de 31 de enero.

Juzgados de lo Penal

SJP Pamplona núm. 4 89/2017, de 7 de abril.
SJP Madrid núm. 24 169/2014, de 6 de mayo.

Juzgados Centrales de Instrucción

AJCI núm. 2 de 23 de junio de 2017.
AJCI núm. 1 de 7 de marzo de 2016.
AJCI núm. 1 de 7 de octubre de 2015.
AJCI núm. 5 de 9 de septiembre de 2015.
AJCI núm. 1 de 2 de julio de 2015.

Juzgados de Instrucción

SJI Cerdanyola del Vallès núm. 8 25/017, de 15 de marzo.
SJI Alicante núm. 8 53/2017, de 6 de marzo.

Jurisprudencia civil

Tribunal Supremo

STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 50/2017, de 27 de enero.
ATS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 11 de octubre de 2016.

Audiencias Provinciales

SAP Madrid (Sección 19ª) 159/2017, de 26 de abril.
SAP Madrid (Sección 25ª) 144/2017, de 18 de abril.
SAP Madrid (Sección 25ª) 128/2017, de 5 de abril.
SAP Madrid (Sección 21ª) 442/2016, de 11 de noviembre.
SAP Madrid (Sección 11ª) 231/2016, de 13 de mayo.
SAP Barcelona (Sección 11ª) 318/2015, de 2 de diciembre.
SAP Madrid (Sección 10ª) 199/2015, de 21 de mayo.

Juzgados de Primera Instancia

SJPI Madrid núm. 40 271/2016, de 27 de julio.

SJPI Sevilla núm. 22 235/2014, de 24 de noviembre.

SJPI Pamplona núm. 5 213/2012, de 15 de octubre.